

La nueva política de los acuerdos:
EL EJECUTIVO Y EL EMPRESARIADO

Giorgio Boccardo • Nicolás Romero



RESUMEN:

Los dilemas que presenta el actual Gobierno para impulsar reformas sustantivas radican en la exacerbada colonización empresarial que sobre él pesa. Ni el obstruccionismo de la derecha política, ni el escaso apoyo recibido de parte de las fuerzas estudiantiles, ni el supuesto retorno de los políticos de la transición son las claves que explican la “baja intensidad” de las reformas impulsadas por Bachelet. Más bien, el entrampamiento se explica por la centralidad que adquieren ciertos grupos empresariales en momentos en que se dirimen los aspectos sustantivos de cada reforma. Esto ha tornado poco trascendente a todos los partidos políticos y lleva a umbrales insospechadamente bajos la legitimidad de la política formal y la propia democracia. Las fuerzas políticas, sin embargo, hacen caso omiso a esta realidad y en la Concertación comienzan a fraguarse diversos reacomodos internos para posicionarse en la futura contienda electoral.

PALABRAS CLAVE:

- Acuerdos.
- Colonización empresarial.
- Política formal.
- Democracia.

Todavía no se cumplen seis meses del nuevo gobierno de Michelle Bachelet y su diseño político inicial comienza a naufragar. Algunos han precisado que la situación es consecuencia del sostenido obstruccionismo de la derecha política; las nuevas burocracias de Gobierno han alegado el escaso apoyo recibido de la fuerza estudiantil a los proyectos de ley enviados, pese a incorporar, según ellos, las demandas de la calle; el progresismo en tanto ha reclamado que los “conservadores” y “neoliberales” de la Concertación torpedean una vez más las reformas con el propósito de recuperar las riendas del conglomerado.

Es el inicio de un acalorado debate entre quienes advierten que el retorno de la “política de los consensos” entrampará las reformas de Bachelet y, con ello, el inicio de un nuevo ciclo, y aquellos que defienden la necesidad de los “acuerdos transversales” para continuar por la senda del “exitoso” modelo chileno. No obstante estos alegatos, existen una serie de rasgos de novedad en la actual coyuntura que hacen cuestionable sostener que el problema central en la política nacional este dado por el retorno o no de los consensos de la transición.

Más allá de los discursos y la retórica socialdemócrata utilizada en la instalación del Gobierno, su gestión se ha caracterizado por el inédito peso que ostentan ciertos grupos empresariales dentro del Ejecutivo, los ministerios y sobre figuras de la propia Concertación¹. En efecto, hoy el empresariado alcanza tal centralidad en la política institucional que se torna imprescindible en momentos que se dirimen los aspectos más sustantivos de cada reforma. En tanto que los partidos políticos, sin excepción, quedan excluidos de todo debate, al punto que la legitimidad del sistema político formal llega a umbrales insospechadamente bajos. Así quedó demostrado en la reciente negociación del proyecto de Reforma Tributaria, pero también parece ser el derrotero que seguirá la agenda energética, la minera, en obras públicas, productividad y, posiblemente de no intervenir las fuerzas educacionales, la reforma educacional.

I. LA DERECHA POLÍTICA EN CRISIS

El acuerdo tributario alcanzado en el Senado entre la Alianza y la Concertación hace suponer el retorno de la “política de los acuerdos” y revive la idea de una derecha política con poder de veto pese a su minoría parlamentaria. Este argumento ha sido esgrimido tanto por el progresismo situado dentro (PS y PPD) y fuera de la Concertación (PRO), como por sus nuevos integrantes (PC, la IC y el MAS). Lo que habría ocurrido, dicen, es una demostración de fuerza de la DC y figuras históricas del “partido transversal de la Concertación” que, a condición de recuperar el protagonismo político, sacrificaron los elementos progresivos que contenía la reforma al sistema tributario originalmente enviada por el Ejecutivo.

El escenario descrito, sin embargo, no concuerda con el estado actual de fuerzas de la derecha, que han demostrado total incapacidad para rearticularse tras la derrota electoral de 2013. De hecho, la UDI ha sostenido un rechazo ideológico a las reformas mientras que RN muestra un comportamiento errático condicionado por la flexibilidad con que Amplitud alcanza acuerdos con el Ejecutivo, como ocurrió en el caso de la reforma al binominal.

La apuesta más novedosa del sector es el intento por liderar las movilizaciones de grupos que se oponen por diversas razones a las reformas tributaria y educacional. Justamente,

¹ Boccardo, G. & Romero, N. (2014, junio). ¿Se inicia un nuevo ciclo político en Chile? Entre la restauración y el arranque de una transformación de la política. Cuadernos de Coyuntura, (3), pp. 4-17.

las nuevas organizaciones de PYME, la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Subvencionados y los propios sostenedores de estos colegios, han contado con el respaldo activo de parlamentarios de RN y la UDI. Pero, más que esfuerzos por anclarse en estas franjas de la sociedad o una estrategia de construcción de fuerzas sociales, lo que prima es la manipulación oportunista de intereses desesperados de cientos de miles de emprendedores y apoderados que confiaban en la política subsidiaria de la Concertación.

A. LA CRISIS DE LOS PARTIDOS Y LA IRRUPCIÓN DE PIÑERA

La reciente renovación de la conducción política de la UDI muestra al poco andar su inoperancia. En momentos en que se ha requerido negociar con el Ejecutivo materias de interés nacional, son los “coroneles” quienes siguen asumiendo desde fuera dichas tareas. Primero fue Longueira quien retornó fugazmente a la primera línea política para respaldar la Agenda Energética impulsada por el ministro Pacheco. Luego el propio Longueira y el senador Coloma se sumaron a la negociación tributaria, cuando la conducción oficial del partido había organizado una campaña del terror contra cualquier modificación impositiva por considerarla contraria a la ortodoxia neoliberal. Pero la reforma tributaria original² y el acuerdo alcanzado entre la Comisión de Hacienda del Senado y los empresarios no modifican el carácter regresivo de la política tributaria. Eso lo saben los coroneles, de ahí que apuesten, como en otras ocasiones, al pragmatismo político, esperando que se configuren mejores condiciones para una ofensiva partidaria. Es una actitud que contrasta con el liderazgo de un Novoa empecinado en la defensa identitaria de una UDI que se ha quedado sin iniciativa política.

En tanto, Cristián Monckeberg asumió la presidencia de RN en plena crisis partidaria producto de la fuga de militantes hacia el movimiento Amplitud y por la carrera presidencial desatada por Allamand y Ossandón. La nueva conducción intentó mantener influencia sobre el curso de la reforma al binominal en la línea del acuerdo alcanzado con la DC en 2013, pero la irrupción de Amplitud en la coyuntura los terminó excluyendo de la negociación. Al igual que en la UDI, son figuras históricas del partido, como Allamand, las que participan en las negociaciones más relevantes con el Gobierno, dejando fuera a las vocerías oficiales. Lo anterior ha sido resistido por un grupo de parlamentarios del partido que manifestó su rechazo al acuerdo tributario. Al parecer, sin embargo, hoy resulta mucho más efectivo políticamente un vínculo personal con el Ejecutivo o con algún grupo empresarial que un cargo de representación popular. En definitiva, RN se ve tensionada por la necesidad de mantener a la oposición unida, evitar el desangre interno hacia Amplitud y, al mismo tiempo, construir acercamientos al sector más conservador de la DC para así ensanchar la centroderecha y tener opciones de volver al gobierno en 2017.

Piñera en cambio proyecta su carrera presidencial posicionándose en los grandes debates y alejado de las pugnas internas de los partidos. Para esto cuenta con Amplitud y la Fundación Avanza Chile y, en caso de ser necesario, no duda en minar el camino de RN o la misma UDI. De ahí que mantenga una posición sumamente crítica del acuerdo tributario alcanzado, al cual no fue convocado, a diferencia de los partidos de derecha. Pero a través de Amplitud se adelanta al eventual acuerdo entre RN y la DC y se pliega a la reforma del binominal. En definitiva, su comportamiento obedece al de un candidato que busca convertirse en la única alternativa posible para la derecha en la presidencial 2017 y no al de un líder político que encabeza un proyecto de renovación del sector y sus partidos. Lo paradójico es que para lograr imponerse como candidato debe atizar la descomposición de los partidos de la derecha pero para ganar la elección requiere de su participación activa.

² Más detalles sobre la reforma tributaria en Equipo de Investigación Nodo XXI. (2014, junio). La Reforma Tributaria de Bachelet. Alcances de una reforma de baja intensidad. *Cuadernos de Coyuntura*, (3), pp. 42-54.

II. ¿HACIA UNA CONCERTACIÓN 3.0?

El diseño político original formulado por Bachelet para su segundo periodo ha enfrentado serias dificultades. En parte por la ineptitud de las nuevas burocracias para elaborar e impulsar proyectos de ley efectivos como por las dificultades que han tenido varios de los ex dirigentes estudiantiles, hoy convertidos en asesores ministeriales, para materializar lo que prometían sus reclutamientos: representar los intereses del malestar 2011.

Un supuesto clave en el diseño original era que el ingreso del PC a la coalición de Gobierno y de Revolución Democrática al Ejecutivo ayudaría a darle una mayor legitimidad social a las iniciativas legislativas de La Moneda. Pese a las expectativas de la Concertación, estos sectores no han conseguido alinear con la iniciativa del Gobierno a las organizaciones sociales cuyas direcciones conducen, como la FEUC y el Colegio de Profesores, que han mantenido una posición crítica ante los anuncios en educación. Este último, de hecho, pese a los esfuerzos de su presidente de afiliación comunista, terminó distanciándose de los proyectos de ley anunciados y convocó a movilizaciones para manifestar su rechazo. La CUT, en tanto, liderada también por el PC, aceptó un reajuste del sueldo mínimo inferior al que la multisindical exige hace años, decisión que desató férreos reclamos en varias de sus asociaciones regionales. Al esfuerzo de comunistas y erredés por defender las reformas propuestas, tal vez para fortalecer su posición dentro del Gobierno, se suma la crítica abierta de sus cuadros insertos en la burocracia estatal a las actuales conducciones estudiantiles por cuanto no sabrían “reconocer” sus triunfos y caen en la “intransigencia”, al negarse a apoyar al Gobierno por pequeños cálculos políticos.

La Moneda, en tanto, decidió no esperar más y recurrió a operadores de fuste -Andrés Palma (DC) y Harold Correa (PPD)- para intervenir el Mineduc e impulsar, ahora sí, las reformas entrampadas en los primeros trámites legislativos. En todo caso, producto de las fuerzas involucradas en la arena educacional, el escenario sigue abierto y no se descarta una negociación directa entre el Gobierno y las fuerzas educacionales. En tanto, se instruyó a políticos de trayectoria en el Senado a vehicular acuerdos con la oposición y, así, reanudar el tranco del programa. Este comportamiento indica la renuncia al uso de las mayorías parlamentarias y abre espacio a los fustigados “hombres de la transición”. Ello modificaría, alegan los nuevos socios de la Concertación, aspectos sustantivos de los proyectos de ley. Finalmente, a fin de destrabar las tensiones de la propia Concertación y tener mayores opciones para impulsar el resto del programa, Bachelet instruye al ministro Peñailillo para que incorpore a RN en el acuerdo de reforma al binominal³, pese a tener comprometidos los votos de Amplitud y parlamentarios independientes.

La arremetida de figuras de la transición en la coyuntura y la apertura del Gobierno a buscar acuerdos con la derecha política abre un debate en el seno de la Concertación que recuerda la polémica entre “autocomplacientes” y “autoflagelantes” ocurrida a fines de los ‘90. De tal suerte, los primeros abrían logrado frenar, una vez más, las aspiraciones de cambio de los segundos. En todo caso, para varios concertacionistas el “corazón” de las reformas no está siendo afectado pese a reconocer problemas en la “forma” o en el cómo se han “comunicado” las negociaciones y acuerdos alcanzados. Para otros, en cambio, se están modificando aspectos sustantivos de las iniciativas de ley, que originalmente eran progresivas, motivo por el cual, concluyen algunos progresistas situados dentro y fuera de la Concertación, se debe impulsar una cruzada que le dé bríos transformadores al futuro Gobierno. En el actual, la sombra de la transición

³ Op. Cit. 1.

impediría aún impulsar reformas sustantivas, por lo que se deben buscar nuevos aliados fuera del conglomerado que, de una vez por todas, permitan imponerse a los “autocomplacientes”.

Alegar inoperancia, incapacidad de conducir vocerías, escaso apoyo de las fuerzas estudiantiles o el peso que aún tienen los “hombres de la transición”, desconoce un hecho esencial de la política chilena actual: el creciente peso de grupos empresariales sobre la política institucional y el declive de los partidos e instituciones políticas. No es que en el pasado los grupos empresariales no intervinieran en política, pero lo hacían a través de un sistema de partidos políticos robusto que aseguraba el desarrollo del programa neoliberal y, al mismo tiempo, la desarticulación de intereses sociales y políticos ajenos a los de los grupos dominantes. En consecuencia, más explicativo de este derrotero es la capacidad que hoy muestra el empresariado para representar directamente sus intereses en la política y mandar a la Concertación a fórmulas de pacto que son vedadas sistemáticamente a otras fuerzas sociales.

Suponer que la coyuntura política chilena se explica todavía a partir del eje “retorno o no de la política de los acuerdos” resulta entonces un argumento acomodaticio para impulsar una nueva restauración espuria de la Concertación (la primera se denominó “Nueva Mayoría”), y configurar tempranamente un escenario presidencial 2017 en que las fuerzas sociales y políticas estén obligadas a definirse, una vez más, entre Montescos y Capuletos.

A. EL CONSENSO DE LAS REFORMAS CON EL EMPRESARIADO

Uno de los rasgos más característicos de la actual coyuntura política es la crisis de legitimidad que afecta a todos los partidos políticos exacerbada todavía más producto de la férrea colonización del empresariado sobre la política. A la ya revisada “bancada ministerial empresarial”⁴ se constatan, una vez más, los conflictos de interés entre la alta dirección pública concertacionista y el mundo de los negocios. Esta vez fueron cuestionados el esposo de la ministra del Trabajo por su arribo (frustrado) a la multinacional Barrick Gold y los emprendimientos educacionales de la esposa (a los que renunció) del nuevo asesor del Mineduc Andrés Palma. No obstante, el caso más emblemático, no tanto por su secretismo sino por sus alcances, es la negociación llevada adelante entre la Comisión de Hacienda del Senado y los representantes empresariales que concluyó con un “pacto social” cuya duración está garantizada, según algunos senadores, por un mínimo de veinte años.

La activa participación del empresariado en política no se expresa únicamente a partir de su incidencia en el bullado acuerdo tributario, también se evidencia en el activo pero silencioso proceso de negociación de la reforma energética encabezada por la cartera de Energía. A esto se agrega el anuncio de Bachelet que posterga el inicio de la discusión sobre nueva Constitución y que, probablemente, no concluirá en su mandato. De esta forma, el empresariado, a pocos meses de instalado el Gobierno, marca con fuerza el contenido y la dirección de las más emblemáticas reformas de La Moneda. En ello radica la “baja intensidad” que estas alcanzan y no, como se ha insistido, en el retorno de los políticos de la transición.

a. El acuerdo tributario

La instalación del Gobierno estuvo marcada por la decisión de implementar rápidamente reformas “estructurales” entre las que se encontraban la reforma educacional y la tributaria. Esta última, cuya recaudación pero sobre todo su impacto en la tributación fue considerado

⁴ Op. Cit. 1.

transversalmente como de “baja intensidad”, fue aprobada luego de una brevísima discusión en la Cámara de Diputados, cuestión que fue celebrada en el discurso pronunciado por la presidenta el 21 de mayo. Pero esta fue sólo la primera etapa de un escenario en el que progresivamente se impondrá el peso específico del gran empresariado.

Los máximos dirigentes de la CPC, la Sofofa y la ABIF desplegaron una ofensiva que contempló la activa participación de economistas neoliberales en el debate público, ácidas declaraciones de dirigentes gremiales y grandes empresarios en la prensa, la organización de seminarios y foros, y el despliegue de videos informativos. Su propósito fue dejar en claro que, pese a que la reforma original no modificaba en lo fundamental la estructura de tributación, no estaban dispuestos a ser vapuleados por una Parlamento que apenas les dio “15 minutos” para exponer sus reparos. Para ello no dudaron en calificar la reforma de inconstitucional y alegaron que tendría una serie de dificultades en su implementación. También denunciaron el daño que esta causaría a la “imagen país”, el desaliento que significaría para el arribo de nueva inversión extranjera directa como también los efectos catastróficos que causaría a los miles de medianos y pequeños emprendedores.

Desde ese momento, en conjunto con el ministro Arenas, se diseñó un plan que permitiera modificar algunos rasgos de la reforma original, como la figura de la renta atribuida, a partir de un proceso de consulta a diversos expertos y gremios empresariales. También se acordó la necesidad de que dicho acuerdo fuera aprobado formalmente en la Comisión de Hacienda del Senado, de allí también la urgencia de incorporar a representantes de una alicaída derecha que hasta ese momento, principalmente en el caso de la UDI, se había opuesto radicalmente a la reforma. Del lado de la Concertación se recurrió a líderes históricos como el ex presidente Lagos y Gutenberg Martínez. En representación de la derecha participó Allamand por RN, el ex ministro de Economía de Piñera, Juan Andrés Fontaine, y por la UDI los coroneles Longueira y Coloma.

Formalmente la negociación fue encabezada por los senadores de la Comisión Zaldívar, Lagos Weber, Montes, Ruminot y Coloma, quienes, bajo la retórica de “los acuerdos transversales” encubrieron a los grandes artífices de la negociación: el Ejecutivo y los gremios empresariales. En efecto, la incapacidad de la derecha para articularse coherentemente dificulta pensar que el acuerdo obedeciera a su presión, en tanto que la bancarrota general de los partidos políticos desdibuja las reacciones escandalizadas del progresismo por el acuerdo alcanzado. Estos últimos más que alegar por el carácter empresarial del pacto logrado, reclamaron por su exclusión de la negociación.

En definitiva, este golpe empresarial logró reducir todavía más los alcances originales de la reforma tributaria, pero sobre todo fue una demostración de fuerza que desnuda los límites en los que la Concertación podrá operar para impulsar las actuales y futuras reformas que emprenda.

b. La silenciosa discusión de la agenda energética⁵

El tema energético no ocupó un papel protagónico durante la campaña presidencial y tampoco ha copado la agenda pública, pero es consenso transversal en el empresariado que de su resultado depende en buena medida la reactivación del crecimiento chileno. Es por ello que

⁵ Más detalles sobre la Agenda Energética revisar “Una Agenda Energética para un nuevo ciclo de acumulación empresarial” en este mismo Cuaderno.

el ministro Pacheco lleva tiempo discutiendo con diversos actores empresariales la Agenda Energética. La nueva política sectorial contempla, tal como señaló Bachelet en la Cena Anual de la Energía, revertir el reducido número de nuevos proyectos en el sector. La Presidenta ofrece transferencia de fondos públicos para impulsar nuevas inversiones y garantías de no ceder ante la presión social, como sí ocurrió bajo la gestión de Piñera. Se señala que su mandato careció de un plan de desarrollo energético y que cedió a las presiones de sectores ambientalistas que se oponen al desenvolvimiento de proyectos de gran impacto.

La actual gestión busca, básicamente, reducir el costo de la energía y, de esa forma, volver lo suficientemente atractivo el margen de utilidades para la inversión extranjera directa. Una que, por esta razón, ha migrado en los últimos años a competidores directos del modelo chileno como son Perú o Colombia. Esta inversión, en todo caso, volverá a situarse en los rubros de minería, construcción y la propia energía, que producto de su especificidad reinstalarán dilemas de orden socio ambiental. De momento los grupos medioambientales y comunidades locales han logrado frenar proyectos emblemáticos como Hidroaysén o Barrancones, pero la nueva Agenda Energética impulsará decididamente un volumen de producción que difícilmente se sustentará en energías renovables y cuyo impacto equivale a varias reformas tributarias o educacionales. En ello radica, en buena medida, el espaldarazo empresarial al ministro Pacheco y la porfiada aceptación de una parte del empresariado al programa de Bachelet.

B. EL REORDENAMIENTO DE LA CONCERTACIÓN: LOS DE "ADENTRO" Y LOS DE "AFUERA"

El entrampamiento inicial de la gestión de Bachelet abre una disputa al interior de la Concertación que busca sindicarse responsables de la actual situación. Pero dicha polémica rebasa los límites formales del conglomerado e incluye fuerzas políticas que de una u otra forma buscan incidir en la coyuntura a través de éste.

La DC, liderada por la alianza Walker-Martínez, se vio inicialmente sobrepasada por la "hegemonía progresista" de la Concertación y encabeza una tenaz oposición política a la gestión de Bachelet. Alegando exclusión y matices con el programa, ha sorteado con éxito la excomunión inicial del partido de posiciones claves en el Gobierno y, paulatinamente, empieza a recuperar poder dentro de éste. No obstante aquello, la disidencia liderada por Cornejo y Pizarro le dificulta a la conducción demócratacristiana sostener una posición cohesionada. Además, ha debido sortear la presión de algunos sectores "DC neoliberales" que comienzan a ser representados por Fuerza Pública, liderada por Andrés Velasco.

El presidente del PS, Osvaldo Andrade, ha abierto puentes con el progresismo liderado por Carlos Ominami para discutir una eventual ampliación de la coalición y obtener nuevos apoyos a las reformas que promueve el Gobierno. En tanto, Ricardo Solari (actual presidente de TVN) comienza a "medir el ambiente" para las negociaciones municipales en las que propone considerar un pacto con el PRO. De ahí en más, la estrategia apunta a la participación de este último partido en las primarias parlamentarias y presidenciales. Ello considera que el PS -de momento sin candidato para 2017- enfrente con MEO las primarias concertacionistas con figuras del PPD (Tohá, Lagos Weber e incluso Peñailillo), de la DC e, incluso, de Fuerza Pública.

De la otra vereda, se constata la reciente ofensiva de los Ominami, el PRO y la Fundación Progresista por apoyar algunas reformas de Bachelet. Al punto que en diversas ocasiones no han dudado en señalar una "alianza estratégica" con su programa y su disposición a enfrentar a los

“conservadores” de la Concertación. Este progresismo ha sido abiertamente crítico con el papel reactivo que ha jugado el PC y RD en el Gobierno, al mismo tiempo que plantea su disposición para construir una gran alianza de centro izquierda que inicie un ciclo de reformas sustantivas. El candidato presidencial permanente del PRO ha manifestado públicamente su disposición a participar en las primarias de la Concertación contra el otro posible candidato del conglomerado, Andrés Velasco (Fuerza Pública). En todo caso, desde el PRO se afirma que antes de ponderar una alianza con la Concertación se debe construir una tercera fuerza política, unida al Partido Humanista y al Partido Liberal.

Más allá de qué candidato se posiciona en la interna de la Concertación o qué “alma” termina condicionando más la orientación del programa, de lo que se trata es de un intento por prolongar la vida de este conglomerado en el poder sin abrirse a pactos con otras fuerzas sociales. Un reacomodo que intenta definir quiénes serían los de “adentro” y los de “afuera” que iniciarán el nuevo ciclo político, pero en la medida que sigue desconociendo la necesidad de incorporar intereses sociales distintos al empresarial, termina por prolongar a la desgastada Concertación.

IV. LA PORFIADA INSISTENCIA DE LAS FUERZAS ESTUDIANTILES

Las fuerzas estudiantiles, los rectores, profesores y diversos intelectuales han insistido que el corazón de la reforma educacional debe ser el fortalecimiento de la educación pública. Una en que predomine la colaboración, la planificación y la democracia. En ese sentido, consideran que la eliminación del lucro, el copago y la selección son condiciones necesarias pero no suficientes para una reforma en la que debe prevalecer una orientación anti subsidiaria. También se ha insistido en que el diseño de la reforma debe incorporar la participación efectiva de las fuerzas sociales implicadas. Lo anterior junto a las críticas de los partidos de la Concertación al manejo político de Eyzaguirre, se tradujeron en cambios drásticos en el Mineduc, la intervención de Interior y de la DC, además del veto de algunos asesores.

Las fuerzas estudiantiles paradójicamente han tenido que resistir los embates no de una derecha en crisis, sino de un progresismo que desde dentro y fuera de la Concertación, critica su incapacidad de comprender la “justeza” de las reformas impulsadas desde el Gobierno. Pese a esto, los estudiantes han logrado sostener una decidida posición orientada a incidir en el curso de la reforma sin dejarse atrapar por las dinámicas internas de la política gobiernista. La aprobación del acuerdo tributario sellado con el empresariado ha puesto nuevamente en alerta a este actor. Ya desde el Senado uno de los íconos del progresismo, el senador Montes, que debe su elección al discurso de representación de los intereses de la calle, se encuentra en una campaña abierta por generar acuerdos con la derecha en materia educacional.

En todo caso, el Mineduc sigue desarrollando una política errática que no logra concitar el apoyo decidido de los estudiantes ni tampoco convence al interior de la Concertación. Busca sumar apoyo de los estudiantes anunciando la derogación del decreto dictatorial que impide la participación estudiantil en órganos directivos de las universidades y al mismo tiempo anuncia que la gratuidad en educación superior sólo será parcial, para luego desdecirse. El debilitamiento de la figura de Eyzaguirre, quien ha sido duramente golpeado por El Mercurio, lo obliga a abrirse a un entendimiento con las fuerzas estudiantiles, particularmente con la Confech.

En definitiva, las fuerzas estudiantiles abogan por una incidencia efectiva en el curso de la reforma educacional pero en un escenario sumamente zigzagueante, donde el Gobierno promueve con un discurso socialdemócrata reformas que apuntan principalmente a la regulación del mercado de la educación. De su capacidad de movilización, propuesta y de forzar un pacto social con el Gobierno en esta materia depende la posibilidad de que exista una reforma sustantiva.

V. SIN PACTO SOCIAL NO HABRÁN REFORMAS SUSTANTIVAS

Todo indica que el principal obstáculo del nuevo gobierno es la exacerbada colonización empresarial que padece, impidiendo desde un inicio que las reformas propuestas amenacen alguno de los pilares de la política social subsidiaria y avancen en una dirección alternativa a la neoliberal.

De momento, las fuerzas políticas que ingresaron para “renovar” la Concertación, sea participando directamente en ella o como burocracia en alguna cartera ministerial específicas, han demostrado su incapacidad para elaborar y ejecutar reformas de “baja intensidad”. Tampoco han podido representar políticamente intereses sociales excluidos por la vieja Concertación y, por ende, no han logrado concitar el apoyo a las reformas de una ciudadanía cada vez más crítica de la política dominante.

La baja intensidad de las reformas planteadas tanto en su versión original como en aquella variante aggiornada por las negociaciones con el empresariado, que no significan en ninguna variante modificaciones sustantivas al modelo neoliberal, han dado paso a la producción de un discurso que intenta legitimar este entrampamiento y proyectar la necesidad de un nuevo liderazgo concertacionista que sostenga el futuro del programa para el próximo gobierno.

A diferencia de lo que han señalado sectores del progresismo, fuera y dentro de la Concertación, esta dificultad no remite a las pugnas entre “autoflagelantes” y “autocomplacientes” con el modelo, tampoco a una disputa entre conservadores y liberales. Menos se resuelve agregándole una nueva sigla partidaria a las próximas primarias. Seguir creyendo que ahí radica el eje sustantivo del actual escenario político es desconocer, por ingenuidad u oportunismo, la hondura que alcanza la transformación del Chile neoliberal en los últimos cuarenta años. Y sobre todo, es ignorar que las nuevas fuerzas sociales hoy no tienen cabida en el actual diseño político.

Como se argumentó, el nuevo escenario está marcado por el poder que ejercen ciertos grupos empresariales que colonizan tanto a la vieja como a la nueva Concertación, al punto que ya comienzan a dibujarse nuevos rostros para liderar el conglomerado y, de esa forma, prolongar la vida política de la “democracia de los acuerdos”. Pero no ya entre fuerzas políticas institucionales constituidas, sino que abiertamente entre el Ejecutivo y los grupos empresariales. Es decir, una alianza política que se niega a forjar pactos sociales con las fuerzas sociales subalternas. En ese sentido, el dilema del Gobierno no se encuentra en el escaso apoyo otorgado por las fuerzas sociales a su programa de reformas; más bien, en la negativa de enviar proyectos de ley que se hagan cargo del malestar ciudadano contra la política social subsidiaria. Pero esa incapacidad no pasa por formular mejores proyectos, comunicarlos adecuadamente a la ciudadanía o nutrir de nuevos rostros la primera fila de las burocracias bacheletistas. El problema radica en que “los padres de las reformas” impiden ajustes de mayor envergadura. En consecuencia, a lo único que puede apelar el Gobierno es a regular los excesos del mercado, tal

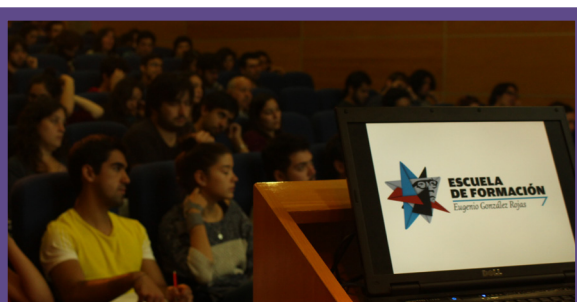
como lo ha exigido en forma urgente una parte del gran empresariado. Suponer algo diferente significaría que la política de la transición se abre a pactos con fuerzas sociales excluidas. Y a ese propósito no parece estar abocada la presidenta Bachelet ▼

SUSCRIPCIONES:

PARA RECIBIR CADA EDICIÓN DE LOS CUADERNOS DE COYUNTURA EN TU DOMICILIO, CONTAMOS CON UNA MODALIDAD DE DONACIONES Y SUSCRIPCIÓN.

► ¿CÓMO PUEDES APOYARNOS?

1. Comprometiéndote con un aporte mensual de 5.000, 10.000, 15.000 pesos o una cifra mayor en la medida de tus posibilidades.
2. A todos quienes hagan un aporte mensual de 5.000 pesos o más se les enviará a su domicilio cada versión de los Cuadernos de Coyuntura que editamos bimestralmente.
3. Puedes elegir la modalidad de pago entre hacer un depósito bancario o una transferencia electrónica mensual a la Cuenta Corriente de Fundación Nodo XXI.



► ¿QUÉ DATOS NECESITAS PARA HACER TU DEPÓSITO?

- Fundación Nodo XXI - RUT: 65.065.819-1
- Cuenta Corriente N°:
008000240709 - Banco de Chile
- Correo de confirmación:
suscripciones@nodoxxi.cl

► ¿A QUÉ DESTINAMOS LAS DONACIONES?

- A la elaboración y difusión de material de estudio sobre problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales, con una perspectiva de derechos y un enfoque que destaca por su originalidad y compromiso con el cambio social.
- A la organización de actividades de formación de masas críticas a través del debate, la deliberación y construcción de miradas colectivas, especialmente en conjunto con organizaciones y movimientos sociales de relevancia nacional.
- A la elaboración y socialización de propuestas y opiniones relevantes para la apropiación crítica de nuestra realidad, a través de material para medios de comunicación, redes sociales, columnas de opinión y campañas.